



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ANTE – PROYECTO
de la
“LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS”

Por

CAONABO FERNANDEZ NARANJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Patrocinada por la Junta Central Electoral
Departamento de Relaciones Públicas,
Publicidad y Prensa.
ENERO DE 1987

A MANERA DE PROLOGO

El presente ante-proyecto, que hemos titulado "LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS", es, por una parte, una oportuna contribución al actual Gobierno presidido por el Dr. Joaquín Balaguer, Presidente Constitucional de la República, y, por otra, un modesto esfuerzo intelectual encaminado a la definitiva institucionalización de nuestros partidos, en lo que se refiere a su creación o fundación, normal desenvolvimiento, proyección social, alcance territorial y reconocimiento oficial, de tal manera que puedan, cumplidas las normas de esta eventual ley, ejercer a plenitud la vida y acción política en nuestro país.

En esta humilde labor, no me atribuyo - pues ello constituiría una innegable insensatez - su total autoría, sino que - más bien constituye un renovado esfuerzo en el estudio y comparación de las normas integradoras de la Ley Fundamental Alemana - equivalente a nuestra Constitución Política - con las de la Ley Argentina No. 22,627 del 28 de agosto de 1932 - una de las legislaciones más moderna en el tratamiento de la materia - con las nuestras que actualmente están incursas en la Ley Electoral vigente, que aún cuando adolecen de diversas lagunas, repetidos silencios y evidentes deficiencias conceptuales, no puede, en cambio, negarse que es una buena legislación de importación. Empero, si ponemos marcado énfasis, contando en ello con especialistas en la materia, podríamos crearla de una manera que fuera de una fácil y cómoda adaptación a las características de nuestro medio, y una vez aprobada por el Congreso Nacional, innegablemente que alcanzaríamos la anhelada meta del indetenible progreso jurídico-partidista, que es ya una ruta esplendorosa recorrida por naciones más civilizadas que la nuestra.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

CONSIDERANDO que es ya una necesidad impostergable la reglamentación de los partidos políticos que, además de permitir la consolidación de los mayoritarios existentes, desaliente a los que no tienen oportunidades y evite la proliferación de partidos sin militancia alguna y, en consecuencia, sin ninguna incidencia en la vida política del país;

CONSIDERANDO que los partidos constituyen en la actualidad, la base política en que descansa nuestro sistema de mocrático representativo; que esas agrupaciones privadas de ciudadanos cumplen las tareas de dirección política, así como la configuración de la vida del Estado; que a través de su función mediadora, el pueblo interviene como sujeto del dominio político y su libertad de actuar es parte integrante del ordenamiento democrático;

CONSIDERANDO que las anteriores funciones partidarias exigen del Estado ponerles límites a su poder de decisión; así como al ejercicio del control del poder político; que los partidos son los guardianes del carácter plural y abierto del proceso de formación de voluntad política y, además, establecen regulaciones sobre el orden interno de los mismos, sus circunstancias y actividades financieras, su relación con el poder del Estado, su capacidad competitiva y el propio registro de sus afiliados;

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art. 104 de la Constitución de la República, es libre la formación y organización de partidos y agrupaciones políticas sometidos a las prescripciones de la Ley Electoral vigente y siempre que sus tendencias y fines se conformen a las normas y principios establecidos en la propia Constitución;

CONSIDERANDO que la Ley Fundamental Alemana, equivalente a nuestra Constitución Política, consagra en el Art. 21: "que los partidos políticos cooperan en la formación de voluntad política del pueblo; que su fundación es libre; que su ordenamiento interior debe estar en consonancia con los principios democráticos y que deben rendir cuenta públicamente acerca de la procedencia de sus recursos financieros";

CONSIDERANDO que, asimismo, dicha Ley Fundamental citada establece que: "son anticonstitucionales los partidos que por sus fines, o por la conducta de sus afiliados, están encaminados a menoscabar el orden democrático y liberal, o a eliminarlos, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania"; partidos que en la actualidad se denominan anti-sistema;

CONSIDERANDO que en el mismo tenor reconoce a los partidos como titulares de tareas públicas, situándolos en cierta proximidad respecto a los órganos del Estado;

CONSIDERANDO que la Ley No. 22,627, orgánica de los partidos políticos en la República Argentina del 28 de agosto de 1982, establece que: "la organización y funcionamiento de las fuerzas y movimientos políticos condiciona y nutre el poder político y constituye a los partidos en nexo funcional entre la sociedad civil y el Estado; que en ellos las tendencias encontradas que genera la vida moderna deben hallar su expresión natural;

CONSIDERANDO que la misma citada ley argentina establece: "que la importante misión que compete a las instituciones como insustituibles mediadoras entre la sociedad y el Estado, requiere que su constitución, autoridades y cuerpos orgánicos sean verdaderas y transparentes expresión de representatividad, a la vez que una programática clara de las corrientes de opinión que fluyen de la sociedad política;

VISTO el Artículo 104 de la Constitución Política de la República Dominicana;

VISTOS los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Electoral No. 5884 del 5 de mayo de 1962, vigente, que establecen los requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos por la Junta Central Electoral;

VISTOS los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 que determinan las causas que extinguen los partidos políticos reconocidos;

VISTOS los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 86 que establecen los requisitos para las propuestas de candidatos por los partidos políticos reconocidos sometidas a la Junta Central Electoral;

VISTOS los artículos 87, 88 y 89 que tratan de las candidaturas accidentales, llamadas comunmente independientes;

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

Principios Generales

Art. 1.- Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, para agruparse en partidos políticos democráticos. Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personería jurídico-política para actuar a nivel nacional, provincial o municipal de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y los requisitos que establece la presente ley. La personería jurídico-política sólo puede ser otorgada por la Junta Central Electoral.

Párrafo I.- Los partidos son parte integrante necesarias del ordenamiento democrático constitucional representativo. Con su libre y permanente coactuación influyen en la formación de la voluntad política del pueblo y en todos los sectores de la vida pública; en la configuración de opinión pública; en la estimulación y profundización de la opinión política; en la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidad pública participando en las elecciones políticas que se celebren en el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y las leyes, mediante la presentación de candidatos. Influyen, además, en la evolución política en las cámaras legislativas y en el propio Gobierno incorporando al proceso de formación de la voluntad estatal los fines políticos elaborados por ellos y procuran mantener vínculos vivos y constantes entre el pueblo y los órganos del Estado.

Párrafo II.- Los partidos políticos expresan sus fines

o tendencias en los programas políticos.

Art. 2.- Los partidos son instrumentos necesarios para la formación y realización de la política nacional y les incumbe en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Concurren a la formación y capacitación de dirigentes que se encuentren en condiciones de desempeñar con idoneidad los cargos públicos para los cuales sean eventualmente electos o designados.

Párrafo I.- Los partidos son asociaciones de ciudadanos que influyen durante su existencia en la formación de la voluntad política proyectada a nivel nacional, provincial o municipal, y cooperan en la representación del pueblo en el Congreso Nacional y en los Ayuntamientos del país, siempre que ofrezcan garantías suficientes de la seriedad de sus fines, considerando el cuadro global de las circunstancias políticas reales, especialmente en cuanto a la amplitud y solidez de su organización, número y registro de afiliados.

Párrafo II.- Los afiliados a un partido político pueden serlo únicamente las personas naturales de nacionalidad dominicana o los naturalizados. Los extranjeros no pueden afiliarse a los partidos formados de acuerdo con esta ley, ni pueden ejercer la política activa en ningún lugar del territorio nacional.

Art. 3.- La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo permanente;
- b) Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez de propugnar expresamente el sostenimiento del régimen civil, republicano, democrático y representativo y los principios y fines de la Constitución;
- c) Organización estable y funcionamiento regulado por los estatutos de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido;
- d) Reconocimiento de su personería jurídico-política por parte de la Junta Central Electoral;

Art. 4.- Los partidos reconocidos, además de su personería jurídico-política, son personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter podrán adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de la presente ley.

Párrafo.- El nombre de un partido reconocido se ha de diferenciar claramente de cualquier otro partido ya existente. - Esta norma vale también para las denominaciones abreviadas y las siglas adoptadas por el partido.

Art. 5.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y se aplicarán a los partidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales, provinciales o municipales.

Art. 6.- Corresponde a la Junta Central Electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la presente ley, velar por la vigencia efectiva de los derechos, reconocimientos, atributos, poderes, garantías y obligaciones establecidas por esta ley, y la Ley Electoral No. 5884 del 5 de mayo de 1962, actualmente vigente, la Constitución y las leyes respecto de los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

TITULO II

De la fundación y constitución

CAPITULO I

Requisitos para el reconocimiento de la personería jurídico-política

Art. 7.- Podrá ser reconocido como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y la presente ley con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos electivos y de propender a la realización de programas políticos trazados conforme a su ideología particular. El reconocimiento deberá ser solicitado a la Junta Central Electoral, mediante instancia escrita y firmada por los organizadores o apoderados, la cual deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

- a) La exposición, siquiera sumaria, de los principios, propósitos, fines y tendencias que sustentará el partido;
- b) Acta de fundación y constitución conteniendo lo siguiente: 1) Nombre y domicilio del partido; 2) Declaración de principios y bases de acción política; 3) Estatutos; 4) Designación de autoridades promotoras o apoderados.
- c) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo presidente o apoderado será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral;
- d) Constancia de la denominación y el lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias, propósitos o fines que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos;
- e) Dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma o los colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán consistir en todo ni en parte en el escudo o la bandera de la República, ni en ningún símbolo, imagen o emblema religioso;

f) Una declaración firmada por los organizadores o apoderados de que el partido cuenta con un número de afiliados no menor del cinco (5) por ciento (%) del número de electores inscritos en el Registro Electoral. La Junta Central Electoral comprobará, en su oportunidad, la veracidad de esa declaración;

g) El documento que acredite la adhesión del número mínimo de electores inscritos en el Registro Electoral que habilita para iniciar la solicitud de reconocimiento contendrá: nombres y apellidos, domicilio y residencia, número del Carné Electoral y número y serie de la Cédula de Identificación Personal, así como la certificación de su veracidad por la autoridad promotora de sus firmas;

h) Cumplido el trámite precedente, el partido quedará habilitado para realizar la afiliación mediante fichas o carnés que formarán su registro y archivo de afiliados;

i) La solicitud de reconocimiento de los partidos políticos deberá ser sometida a la Junta Central Electoral, a más tardar - ciento cinco (105) días antes de la fecha de la celebración de la elección general u ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones accidentales deben hacer a la Junta Central Electoral la declaración, solicitando la autorización, a que se refiere el artículo 87 de la Ley Electoral vigente;

j) Recibida, en Secretaría, la solicitud de reconocimiento, la Junta Central Electoral fijará audiencia pública, para oír, dentro de los treinta (30) días siguientes, a todos los partidos políticos reconocidos, previamente citados, las observaciones formuladas por éstos en cuanto a la solicitud del partido interesado. A dicha audiencia deberá concurrir inexorablemente el partido peticionario y serán oídos los partidos reconocidos que demuestren interés, en la persona de sus delegados o apoderados. En esta audiencia sólo podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos o al uso del nombre si no lo hubiesen hecho antes o emblemas partidarios propuestos. Se presentarán en la misma audiencia las pruebas en que se fundan tales observaciones;

k) Celebrada la audiencia sin observaciones, o infundadas, de parte de los demás partidos reconocidos, la Junta Central Electoral dictará una simple resolución, sin motivación, en la que declarará recibibile en la forma, la solicitud de reconocimiento. En los casos en que se produzcan observaciones bien fundadas, la Junta Central Electoral dictará la resolución motivada declarándola irrecibible por ser irregular en la forma, devolviéndola al peticionario para que la complete o la regularice;

l) Aceptado o denegado el reconocimiento, por aplicación del reglamento interno dictado por la Junta Central Electoral sobre la materia, ésta lo notificará al Presidente o apoderado del partido en formación, el que podrá interponer recurso de revisión y revocatoria cuando considere afectados sus intereses. Este recurso se incoará dentro de los diez (10) días de la notificación. Si dicho recurso no es incoado en el indicado plazo la Junta Central Electoral lo declarará irrecibible por tardío. La decisión definitiva adoptada por la Junta Central Electoral es inapelable.

m) Comprobada positivamente la militancia del partido peti-
cionario de acuerdo con los requisitos exigidos por el reglamen-
to interno, y si la Junta Central Electoral encontrare que los -
principios y propósitos que sustentará el partido no están c n
conflicto con la Constitución y las leyes, y que los documentos
presentados con la solicitud se amoldan en su esencia y forma a
las prescripciones legales y reglamentarias extenderá mediante -
resolución motivada el reconocimiento a dicho partido, que será
notificada a los promotores u organizadores del partido en forma-
ción, quienes podrán entonces proceder a su constitución formal y
definitiva, dentro de los noventa (90) días de la notificación -
del reconocimiento. Al efecto deberán promover la celebración de
la Asamblea Constituyente, que estará integrada por delegados de
cada uno de los municipios donde tenga órganos directivos o direc-
torios provisionales. Corresponderá a la Asamblea Constituyente -
votar los estatutos, elegir los miembros de los cuerpos directivos
y consultivos, conforme a las disposiciones de sus estatutos, pa-
ra el primer período partidario que éstos determinen. Los estatu-
tos deberán disponer la reunión periódica de convenciones ordina-
rias, en las cuales residirá la autoridad del partido.

Art. 8.- Una vez celebrada la Asamblea Constituyente, el Di-
rectorio Nacional elegido por los delegados que a ella hubieren
concurrido completarán la documentación enviada a la Junta Cen-
tral Electoral con un ejemplar o copia certificada por funciona-
rio competente del partido de las actas de las sesiones de dicha
asamblea en la que deberán constar los nombres de los delegados,
los acuerdos y resoluciones acoptados, los resultados de la elec-
ción del Directorio Nacional del partido y el texto completo de
los estatutos, tal como hubieren quedado aprobados.

La Junta Central Electoral formará con los documentos some-
tidos, según se ha dicho, el expediente del partido, el que po-
drá ser libremente consultado. A dicho expediente serán incorpo-
radas las resoluciones de carácter general que dicten las asam-
bleas, las cuales, para su obligatoriedad, deberán ser autentica-
das por la Junta Central Electoral, con la leyenda: "ES CONFORME
CON LA LEGISLACION ELECTORAL". Al expediente serán también incor-
porados todos los documentos que se relacionen con alianzas o coa-
liciones concertadas por el partido o la extinción de éste por -
cualquiera de las causas previstas por esta ley.

Las diferencias que surgieren entre la Junta Central Electro-
ral y los representantes de los partidos, en lo atinente a sus re-
soluciones, serán resueltas, en audiencia pública, mediante pro-
cedimiento sumario que será informado previamente por la Junta -
Central Electoral.

Art. 9.- Terminadas definitivamente todas las actuaciones
de las Asambleas Constituyentes y constituidos los partidos re-
conocidos, el Presidente del Directorio Nacional, o su apoderado,
legalmente elegido y representado, en su calidad de autoridades
partidarias, deberán hacer rubricar por el Presidente de la Jun-
ta Central Electoral, los siguientes libros:

- 1) Libro de Inventario;
- 2) Libro de Caja;
- 3) Libro de Actas y Resoluciones.

Art. 10.- Todos los trámites ante la Junta Central Electoral, hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias, serán efectuadas por las autoridades promotoras o fundadoras, quienes serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones, siendo pasibles de la responsabilidad que, para el funcionario público, establece la legislación penal vigente en los artículos 147 y siguientes del Código Penal sobre falsedad en escritura pública o privada.

Art. 11.- Los estatutos del partido deberán contener la reunión periódica de convenciones ordinarias, en las cuales residirá la máxima autoridad del partido y el nombramiento de sus dirigentes legales. Los estatutos deben contener normas sobre lo siguiente:

- a) El nombre del partido, así como la denominación abreviada y las siglas usuales, su sede en la capital de la República y el ámbito de su actuación;
- b) Admisión y baja de afiliados;
- c) Derechos y deberes de los afiliados;
- d) Registro y archivo de afiliados, mediante la expedición de fichas o carnés a cada uno de ellos;
- e) Medidas disciplinarias contra los afiliados y su expulsión por faltas graves;
- f) Estructura general del partido;
- g) Composición y facultades y derechos del Comité Ejecutivo Nacional y de los demás órganos de dirección;
- h) Adopción de acuerdos por las asambleas de delegados sobre el programa político del partido, modificación de los estatutos, reglamentación de cuotas, reglamentación del tribunal disciplinario y de arbitraje, liquidación y disolución del partido o fusión con otros partidos, elección del Presidente, Vicepresidente y de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional en la fecha que determinen los estatutos.

Art. 12.- Una vez celebrada la Asamblea Constituyente, el Directorio Nacional elegido por los delegados que a ella hubiere asistido.

concurrido lo informarán a la Junta Central Electoral, en la que habrá un libro especial para registrar en síntesis a los partidos políticos reconocidos, otorgándoles los números correspondientes de acuerdo a la fecha del reconocimiento, comenzando por el número uno (1). Este número es válido para los fines del reconocimiento.

Art. 13.- Todo partido político reconocido de conformidad con la Constitución y la presente ley, estará en libertad de realizar todos los actos propios de ese género de instituciones que no le estén prohibidas por la Constitución y las leyes, debiendo ceñirse a las disposiciones constitucionales y legales y a las que emanen de la Junta Central Electoral. Podrán demandar y ser demandados por ante los Tribunales de la República. - Se prohíbe a los partidos políticos toda actividad que tienda o tenga por resultado suprimir o adulterar los derechos humanos y las libertades fundamentales, derechos y garantías individuales y sociales que la Constitución consagra; predicar o poner en práctica teorías o doctrinas que pugnen con la forma civil, republicana, democrática y representativa del Gobierno; promover o propiciar la alteración del orden público; escoger sus integrantes por razón de raza o religión; influir por medio de la violencia, amenazas o engaños sobre los ciudadanos para obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de los otros partidos; imponer o aceptar exacciones o deducciones a los empleados públicos de ~~los~~ ~~empresas~~ ~~particulares~~, aún cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios; y usar, en cualquier forma o a cualquier título los bienes del Estado, las provincias o municipios, o los fondos públicos en provecho propio de los candidatos por ellos postulados.

Se prohíbe igualmente a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier agrupación o partido o de cualquier candidato, o permitir el uso, en cualquier forma y a cualquier título de tales bienes o fondos, a más tardar sesenta (60) días antes de la fecha de

cualquier elección. Cada partido deberá presentar a la Junta Central Electoral una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos por intermedio de auditores designados por ella a expensa del Estado, cuando a su juicio lo justifiquen las circunstancias y el interés público. A más tardar tres (3) meses después de cada elección general u ordinaria, los partidos enviarán a la Junta Central Electoral, informes pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley prohíbe y que han sido invertidos en actos ilícitos de organización, proselitismo y propaganda partidaria.

Art. 14.- Todo partido político reconocido estará investido de la personería jurídico-política, que sólo podrá otorgar la Junta Central Electoral, y podrá, en consecuencia, ser sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones y realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para los fines que les son propios. Será representado de pleno derecho por el Presidente de su órgano directivo central o por quien haga sus veces, salvo cuando hubiere otorgado regularmente mandato a otra u otras personas o entidades para tal representación.

Art. 15.- Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica de los partidos son función exclusiva de las personas naturales. Por tanto, sólo se considerará como ingresos lícitos, los donativos o contribuciones que provengan de esas personas naturales, y será ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros, o de personas jurídicas oficiales o privadas. Tal intervención, sea cual fuere la forma en que se produzca, constituye presunción irrefutable de entendimiento con los partidos o sus candidatos en beneficio de los intereses de esas entidades o sus propietarios, socios, accionistas, directores o representantes, y en tal virtud queda absolutamente prohibida.

Art. 16.- Los partidos reconocidos podrán aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la presente ley y por los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral. La alianza o coalición se constituye entre dos o más partidos.

Las alianzas o coaliciones deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados a las convenciones nacionales que a ese efecto celebre cada uno de los partidos, y cuyas actas deberán ser sometidas al examen de la Junta Central Electoral, ante la cual podrán reclamar los disconformes con la alianza o coalición, dentro de las cuarentiocho (48) horas después de aprobada ésta por las convenciones de los partidos; pero dichas reclamaciones deberán, en todo caso, fundarse en transgresiones de orden moral o legal bien definidas. Es potestativo de la Junta Central Electoral denegar de plano las reclamaciones contra las alianzas o coaliciones de partidos, o conocer de ellas contradictoriamente en forma sumaria.

La alianza o coalición tendrán siempre un carácter transitorio y dentro de ella cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su propia personería jurídico-política, limitada

por el pacto de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de sus afiliados. Los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, con una representación común, igual a la de los otros partidos, en las Juntas electorales.

La alianza o coalición quedará disuelta al término de la campaña electoral que la hubiere motivado, salvo acuerdo en contrario. Para los efectos de la conservación de la personería jurídico-política de cada partido aliado o coaligado, los partidos votarán por los candidatos comunes, pero con las boletas de votación de cada uno de ellos cuando se use una boleta distinta para cada partido que concorra a la elección. Si se utiliza la boleta única ésta estará regulada en estos aspectos por la resolución que la implantare.

En las nóminas comunes de candidatos de cualquier alianza o coalición de partidos se indicará al pie o a continuación del nombre de cada candidato las siglas del partido al cual pertenece, con el objeto de que la Junta Central Electoral pueda computar el número de votos obtenidos por cada partido y los cargos de elección popular que hubiere conquistado en las urnas cada partido, para los fines que la presente ley determine.

El reconocimiento de la alianza o coalición deberá solicitarse a la Junta Central Electoral por los partidos que la integren, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Especificación de los partidos que acuerdan aliarse o coaligarse y justificación de la voluntad de formar la alianza o coalición con carácter permanente o para una sola elección, expresada por los organismos partidarios competentes;

b) Acompañar la solicitud de reconocimiento de las resoluciones de la Junta Central Electoral que reconocieron la personería jurídico-política a cada uno de los partidos que celebran la alianza o coalición;

c) Nombre de la alianza o coalición y elección de domicilio común o central de los partidos aliados o coaligados;

d) Adjuntar el acta de elección de las autoridades que van a dirigir la alianza o coalición y la designación de los apoderados y suministrar nómina de las autoridades de cada partido aliado o coaligado.

Art. 17.- Los partidos aliados o coaligados tienen el derecho de secesión o separación y podrán denunciar el acuerdo de la alianza o coalición. Sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

Art. 18.- Los partidos políticos reconocidos, una vez constituidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley pueden fusionarse mediante el procedimiento establecido por la presente ley y por los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral.

Las fusiones, deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados a las convenciones nacionales que a ese efecto celebre cada uno de los partidos, ante la cual podrán reclamar los disconformes con la fusión, dentro de las cuarentiocho (48) horas después de aprobada la fusión, por las convenciones de los partidos fusionados; pero dichas reclamaciones deberán, en todo

caso, fundarse en transgresiones de orden moral o legal bien definidas.

Es potestativo de la Junta Central Electoral denegar de plano las reclamaciones contra las fusiones, o conocer de ellas contradictoriamente en forma sumaria. Cuando la Junta Central Electoral decida conocerla contradictoriamente en forma sumaria, deberá comunicárselo a los delegados de los partidos políticos conjuntamente con la notificación y a sus respectivos suplentes para su conocimiento.

Art. 19.- La fusión causa la extinción del partido fusionado y la cancelación de la personería jurídico-política de todos los partidos fusionados, subsistiendo únicamente la del receptor el cual queda personificando la fusión. En el acuerdo de la fusión se podrá cambiar el nombre del partido que personifica la fusión y mantiene su existencia legal.

En los casos en que la fusión intervenida no es impugnada por los partidos que hayan intervenido en ella, la Junta Central Electoral, examinadas las actas de la fusión, dictará de oficio una simple resolución, sin motivación, aprobando la fusión y declarando extinguidos a los partidos fusionados y la cancelación de la personería jurídico-política de cada uno de ellos; ordenando, además, que los expedientes respectivos de los partidos fusionados sean cerrados, clausurados y archivados, después de incorporar a cada uno de ellos la documentación correspondiente. - La misma resolución declarará subsistente al partido fusionante o receptor y mantendrá la personería jurídico-política del partido que personifique la fusión., así como los cambios de nombres que hayan sido acordados al partido que personifique la fusión, pasando a formar parte de la afiliación del partido fusionante o receptor los de los partidos fusionados.

Art. 20.- Los partidos políticos reconocidos podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección, siempre que sus respectivos estatutos la autorice.

El reconocimiento de las alianzas transitorias deberá ser sometida a la Junta Central Electoral, por lo menos dos (2) meses antes de la elección, cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) La constancia de que la alianza fué resuelta por los organismos partidarios competentes;
- b) Nombre adoptado;
- c) Plataforma electoral común;
- d) Constancia de la forma acordada para la integración de las listas de candidatos, los que deberán ser elegidos de conformidad a las normas estatutarias de los partidos a los que pertenezcan;
- e) La designación de apoderados comunes,

CAPITULO II

Del Nombre.

Art. 21.- Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro en la Junta Central Electoral y su uso.

El nombre deberá ser adoptado en el acto de la constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

La denominación "partido" únicamente podrá ser utilizada por los partidos en constitución o reconocidos, así como también a los partidos que hayan incurrido en la caducidad de la personería jurídico-política.

El nombre no deberá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni provocar confusión material o ideológica del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o supresión de vocablos a los nombres de partidos reconocidos, ni usar vocablos dominicanos nacionales ni internacionales, o sus derivados, o vocablos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la República, o implicar antagonismos de razas o religiones, ni que contravengan disposiciones de la Constitución y de la presente ley.

Art. 22.- El nombre de un partido, alianza o coalición legalmente constituido es un atributo exclusivo y no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o entidad, de cualquier naturaleza en todo el territorio nacional.

Cuando una persona, un partido o una asociación o entidad de cualquier naturaleza usare indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido, la Junta Central Electoral decidirá a petición de parte interesada, el cese inmediato del uso indebido, disponiendo el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

Cuando un partido fuere declarado extinguido, o se fusionare con otro, su nombre no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurrido cuatro (4) años de la resolución firme de la Junta Central Electoral que declare la extinción del partido.

Art. 23.- El nombre del partido, su cambio o modificación deberá ser aprobado por la Junta Central Electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales.

Solicitado el reconocimiento del nombre adoptado, la Junta Central Electoral dispondrá la notificación a los delegados o apoderados de los demás partidos reconocidos y en formación, la fecha en que fué adoptado, al efecto de la oposición que pudieren formular.

Los partidos reconocidos o en constitución podrán oponerse al reconocimiento del nombre, con anterioridad a la audiencia - que haya sido fijada por la Junta Central Electoral para conocer del caso o en el acto de la misma.

La resolución definitiva dictada por la Junta Central Electoral será notificada a todos los partidos políticos o en formación, en la persona de sus delegados o apoderados.

Art. 24.- Se reconoce asimismo a los partidos el derecho al uso permanente de un número de identificación, el que será asionado por la Junta Central Electoral, debidamente registrado en el orden numérico correspondiente a la fecha de su reconocimiento. Este número es válido únicamente para los efectos legales del reconocimiento.

CAPITULO III Del Domicilio

Art. 25.- Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital de la República por haber solicitado el reconocimiento a la Junta Central Electoral. Asimismo deberán comunicar a la Junta Central Electoral los domicilios provinciales y municipales.

Art. 26.- A los fines de la presente ley, el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en el Registro Electoral, y supletoriamente el anotado en la Cédula de Identificación Personal.

TITULO III DE LA DOCTRINA Y ORGANIZACION

CAPITULO I

Declaración de principios y Programas o bases de acción política.-

Art. 27.- La Declaración de principios y el programa o bases de acción política deberán ajustarse a las disposiciones de la Constitución y las leyes, y a las previsiones del Art. 3 de la presente ley, que exige que la doctrina en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez de propugnar expresamente el sostenimiento del régimen civil, republicano, democrático y representativo.

Art. 28.- No cumplan con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación, por vía de sus organismos o candidatos lleven a la práctica la negación de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la sustitución del régimen democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder.

CAPITULO II

De los Estatutos y de la Plataforma Electoral

Art. 29.- Los estatutos regularán la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- a) Gobierno y Administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas serán los órganos de jerarquía superior del partido; la duración del mandato en los cargos partidarios que no podrá exceder de cuatro (4) años;
- b) Sanción de los órganos partidarios de la declaración de principios, el programa o bases de acción política;
- c) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante el término mínimo de sesenta (60) días y

- anunciada con un (1) año de anticipación; los estatutos deberán asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la afiliación;
- d) Participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos;
 - e) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
 - f) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido;
 - g) Conformar tribunales de disciplina, cuyos integrantes gocen de garantías que aseguren la independencia de su cometido;
 - h) La capacitación de los cuadros partidarios en la problemática local, provincial, regional, nacional e internacional;

Art. 30.- Los estatutos constituyen la norma fundamental del partido, en el que constan los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias y al que sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación.

Art. 31.- Los estatutos y sus modificaciones deberán ser sancionados por los órganos deliberativos del partido y aprobados por la Junta Central Electoral, en lo concerniente a las exigencias del Art. 23.

Art. 32.- La justificación de la documentación exigida en los Títulos II y III de esta ley se hará mediante testimonio o copia auténtica expedida por Notario Público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original, por la Junta Central Electoral.

Art. 33.- Con anterioridad a la elección de candidatos, los organismos partidarios competentes deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política. Copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos deberán ser remitidas a la Junta Central Electoral, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TITULO IV

Del funcionamiento de los Partidos

CAPITULO I

De la Afiliación

Art. 34.- Para afiliarse a un partido se requiere:

- a) Estar domiciliado o residir en el municipio en que se solicite afiliación;
- b) Comprobar la identidad del solicitante con la Cédula de Identificación Personal;

- c) Presentar por duplicado una ficha o formulario de solicitud que entregará el partido que contenga: nombre y apellidos, domicilio y residencia, número y serie de la Cédula de Identificación Personal, sexo, estado civil, profesión u oficio, y firma o impresión digital en caso de no saber firmar.

La firma o impresión digital deberá certificarse en forma fehaciente por Notario Público competente, o certificarse pura y simplemente por la autoridad partidaria también competente. En los casos de certificación por Notario Público, lo será al sólo efecto de la autenticidad, no siendo aplicables las exigencias de la Ley de Registro de Actos Judiciales y Extrajudiciales a los fines de acordarle fecha cierta al acto.

También podrán certificar las firmas y las huellas digitales los integrantes de los organismos ejecutivos y la autoridad partidaria que éstos designen.

Los archivos de afiliados y los formularios de solicitud de afiliación, podrán siempre ser inspeccionados por la Junta Central Electoral, y las falsedades cometidas al respecto, serán sancionadas de conformidad con los artículos 147 y siguientes del Código Penal.

Art. 35.- No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del Registro Electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;
- c) Los extranjeros;
- d) Los condenados a penas criminales hasta su rehabilitación;
- e) Los interdictos legales o judiciales declarados por sentencia firme de los Tribunales de la República.

Art. 36.- La calidad de afiliado se adquirirá a partir de la resolución de la resolución de aprobación de los organismos partidarios competentes, que deberá expedirse dentro de los noventa (90) días a contar de la fecha de la presentación de la solicitud. - Transcurrido dicho plazo sin que mediare decisión en contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Una ficha o carné de afiliación se entregará al interesado, y la otra será conservada por el partido. No podrá haber más de una afiliación.

La afiliación a un partido exige la renuncia previa a toda otra afiliación anterior. Los que sin haberse desafiliado formalmente de un partido se afiliaren a otro serán inhabilitados para el ejercicio de sus derechos políticos, incluso la afiliación a cualquier partido por el término de dos (2) años.

La afiliación se extinguirá por la muerte del afiliado, por renuncia, por expulsión debida a faltas graves, por incumplimiento o violación de lo dispuesto en los artículos 31 y 32, y por lo previsto en el artículo 69 de la presente ley.

La extinción de la afiliación, por cualquier causa, será comunicada a la Junta Central Electoral por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse conocido.

Art. 37.- El registro de afiliados está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas o carnés de afiliaciones el cual será llevado por los partidos y podrá ser inspeccionado, en cualquier tiempo, por la Junta Central Electoral.

CAPITULO II

Elecciones Partidarias Internas

Art. 38.- Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante la participación de los afiliados de conformidad con las prescripciones de sus estatutos. Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones deberán realizar la elección de las autoridades por el voto directo y secreto de los afiliados.

Las elecciones internas para la designación de autoridades serán consideradas válidas cuando votare un porcentaje de afiliados superior al diez (10) por ciento (%) del requisito mínimo establecido en el Art. 7, apartado 4. De no alcanzarse tal porcentaje se deberá efectuar una segunda elección dentro de los treinta (30) días, que a efectos de ser tenida por válida deberá cumplir los mismos requisitos.

La no acreditación de este requisito en elecciones de autoridades, dará lugar a la caducidad de la personería jurídico-política del partido.

En caso de oficializarse una sola lista para la elección de autoridades, no podrá prescindirse del acto eleccionario.

Art. 39.- Las elecciones partidarias internas se regirán por los estatutos, subsidiariamente por esta ley, y en lo que sea aplicable por la legislación electoral.

Art. 40.- La Junta Central Electoral podrá de oficio, o a petición de parte, controlar la totalidad del proceso electoral interno por medio de sus inspectores o apoderados, designados al efecto, quienes confeccionarán un acta con los resultados obtenidos, suscrita por las autoridades partidarias.

Art. 41.- El resultado de las elecciones partidarias internas será comunicado a la Junta Central Electoral, dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la elección.

Art. 42.- No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

- a) Los excluidos del Registro Electoral, como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;
- c) Los extranjeros;
- d) Los condenados a pena criminal hasta su rehabilitación;
- e) Los interdictos legales y judiciales declarados por sentencia firme de los tribunales de la República.

Art. 43.- La residencia exigida por la Constitución y las leyes como requisito para el desempeño de los cargos para los que se postulan los candidatos, podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial, siempre que figuren inscritos en el Registro Electoral del municipio correspondiente.

Art. 44.- El ciudadano que en una elección partidaria interna suplantare a otro sufragante, o votare más de una vez en la

misma elección, o de cualquier otra manera sufragare sin derecho o dolosamente, será inhabilitado por cuatro (4) años para elegir y ser elegido inclusive en las elecciones partidarias internas y para el derecho al registro y el uso exclusivo de sus símbolos, emblemas y números, los cuales no podrán ser usados por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

Art. 43.- El ejercicio del derecho al registro y el uso de los símbolos, emblemas y números partidarios, se regirán por las disposiciones contenidas en el Título II, Capítulo II de esta ley en lo que sean aplicable.

CAPITULO III

Del registro de los actos que hacen la existencia partidaria

Art. 45.- La Junta Central Electoral llevará un registro público, a cargo del Secretario, donde deberán inscribirse:

- a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos pre-existentes;
- b) El nombre del partido, sus cambios y modificaciones;
- c) El nombre y domicilio de sus delegados o apoderados;
- d) Los símbolos, emblemas y números partidarios que se registren;
- e) El registro de afiliados y la cancelación o la extinción de la afiliación;
- f) La cancelación o caducidad de la personería jurídico-política partidaria;
- g) La extinción, liquidación y disolución definitiva de los partidos;

Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones serán comunicadas por la Junta Central Electoral a los demás partidos políticos reconocidos.

TITULO V

Del patrimonio del partido

CAPITULO I

De los bienes y recursos

Art. 47. El patrimonio del partido se integrará con las contribuciones de sus afiliados, los subsidios del Estado y los bienes y recursos que autoricen sus estatutos y que no prohíba la presente ley.

Art. 48. Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer cargas de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que

acredite fehacientemente el origen de la donación por tres (3) años;

- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárcticas o descentralizadas nacionales, provinciales o municipales, o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provinciales o municipales, o entidades autárcticas o descentralizadas, o de empresas que exploten juegos de azar, o de gobiernos o entidades o empresas extranjeras;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de asociaciones que se encuentran en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando hubieren sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Art. 49.- Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, incurrirán en multas equivalentes al doble de la donación o contribución ilícitamente aceptadas.

La persona jurídica que efectúare las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior incurrirá en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieran a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y partidarias internas, a la vez que inhabilitados para el desempeño de cargos públicos por el término de dos (2) a cuatro (4) años;

a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades, u organizaciones contempladas en el Art. 44, y, en general, todas las personas que contravinieren lo allí dispuesto;

b) Los afiliados que por sí o por interpósita persona aceptaren o recibieren, a sabiendas, donaciones o aportes para el partido de las personas indicadas en el inciso precedente, así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona, solicitaran a sabiendas de aquellas donaciones para el partido o aceptaren o recibieren donaciones anónimas, en contra de lo prescrito por el artículo 44;

c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados, para un partido. Así como los afiliados que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para el partido contribuciones o donaciones así obtenidas;

d) Los que utilizaren directa o indirectamente, fondos de un partido, para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Art. 50.- Todas las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones anteriores ingresarán al "Fondo Partidario Permanente" creado por el artículo 54.

Art. 51.- Los fondos del partido deberán depositarse en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determinaren los estatutos o los organismos directivos.

Art. 52.- Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios, o que provinieran de donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.

Art. 53.- Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas o contribución y de sus mejoras.

La exención alcanzará a los bienes de renta del partido siempre que ésta fuera invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare directa o indirectamente el patrimonio de persona alguna y el papel destinado al uso del mismo.

CAPITULO II

Del "Fondo Partidario Permanente" y de los Subsidios y Franquicias.

Art. 54.- Créase el "Fondo Partidario Permanente", con la finalidad de proveer a los partidos políticos reconocidos de los medios económicos que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

La Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos determinará anualmente la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro "Fondo Partidario Permanente".

El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Junta Central Electoral, dispondrá de dichos fondos, a los efectos que determine esta ley y demás disposiciones que puedan dictarse sobre la materia.

Si un partido no obtuviere el tres (3) por ciento (%) de los votos válidos emitidos en una elección, perderá el derecho a la participación en el "Fondo Partidario Permanente", así como cuando el partido no concorra a las elecciones, por cual -quier motivo.

Art. 55.- El Poder Ejecutivo establecerá de común acuerdo con la Junta Central Electoral, las franquicias y exenciones - que con carácter permanente o transitorio, se acordarán a los partidos políticos reconocidos.

CAPITULO III

Del Control Patrimonial

Art. 56.- Los partidos por el órgano que determinen los estatutos deberán:

- a) Llevar contabilidad de todo ingreso de fondos o espe-cie, con indicación de la fecha de los mismos y de los

nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse durante tres (3) ejercicios con todos sus comprobantes;

- b) Dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada ejercicio, presentar a la Junta Central Electoral el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificado por contador público autorizado o por los órganos de control del partido;
- c) Dentro de los sesenta (60) días de celebrado el acto electoral en que haya participado el partido, deberá presentar a la Junta Central Electoral cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral.

Art. 57.- Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deberán estar en la Secretaría de la Junta Central Electoral para conocimiento de los interesados y de los demás partidos políticos reconocidos y del Estado durante treinta (30) días hábiles.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de vencido dicho - plazo no se hicieren observaciones, la Junta Central Electoral - ordenará su archivo.

Si se formularan observaciones por violación de las disposiciones legales o de los estatutos, la Junta Central Electoral resolverá, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Los estados anuales de las organizaciones partidarias debe - rán publicarse en un periódico de circulación nacional.

TITULO VI

De la suspensión y caducidad de la
personería jurídico-política de los partidos
reconocidos.

Art. 58.- Incurrirán en la suspensión de la personería jurídico-política los partidos reconocidos que no concurren a las elecciones generales que se celebren por mandato de la Constitución y de la Ley Electoral vigente, hayan o no presentado candidatos. En estos casos la Junta Central Electoral notificará la suspensión, con sus consecuencias legales, al partido que no haya concurrido a la elección, así como a los demás partidos politicos reconocidos para su conocimiento.

La suspensión podrá ser levantada, por la Junta Central Electoral, cuando el partido justifique que no ha concurrido a la elección por una causa de fuerza mayor.

En caso de que la Junta Central Electoral haya incurrido en gastos de impresión de boletas de partidos que no hayan concurrido a la elección, se mantendrá la suspensión hasta que los partidos indemnicen a la Junta Central Electoral los gastos en que haya incurrido por tal concepto.

La suspensión no afectará el registro del partido, ni entraña la pérdida definitiva de la personería jurídico-política.

El levantamiento de la suspensión, será notificado a los partidos afectados y a los demás partidos políticos reconocidos.

efectuarse mediante copia autentica del acta de elección o designación de autoridades o apoderados, o por poder _ otorgado mediante escritura pública;

- c) Tendrán personería para actuar ante la justicia los partidos reconocidos o en trámite de reconocimiento; sus afiliados cuando les hayan desconocido los derechos otorgados por los estatutos y hayan agotado, en su interés, todas las instancias partidarias;
- d) En todo cuanto no se opongan a disposiciones específicas de la presente ley, serán de aplicación las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Comercio;
- e) Será de aplicación el Código de Instrucción Criminal para el castigo de los crímenes y delitos contenidos en la presente ley.

Art. 72.- Todo partido reconocido por la Junta Central Electoral, estará investido de personería jurídico-política y podrán, en consecuencia, ser sujetos activos y pasivos de derechos y obligaciones y realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para los fines que le son propios. Será representado, de pleno derecho, por el Presidente de su órgano directivo central o quien le sustituya legalmente,, o haya designado como apoderado, - cuando hubiere otorgado regularmente mandato, a otras personas o entidades para tal representación.

CAPITULO II.

Tentativa de Conciliación

Art. 73.- Habrá una Cámara de Conciliación integrada por el Presidente y Miembros de la Junta Central Electoral, para tratar de zanjar o conciliar las desavenencias, conflictos y oposiciones internas en los partidos políticos reconocidos, y sobre todo para evitar las peligrosas divisiones generadoras de tendencias, que - pudieren poner en peligro la existencia de los partidos reconocidos. Esta institución cameral conocerá del caso apoderada por los facciosos o grupos disidentes que si consideren afectados en sus intereses dentro de la vida interna del partido. Habrá una sola - tentativa de conciliación, elevada por escrito, y si los disidentes no se ponen de acuerdo o no acatan la intervención de esta cámara, podrán entonces recurrir al procedimiento de arbitraje. La tentativa de conciliación procede cuando los disidentes o en desacuerdo hayan agotado todas las instancias internas del partido sin resultado alguno.

CAPITULO III

Procedimiento de Arbitraje

Art. 74.- Habrá un Tribunal de Arbitraje integrado por el Presidente y Miembros de la Junta Central Electoral, que sólo po-

e) Por fusión con otros partidos.

Art. 64.- La extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su liquidación.

Art. 65.- La extinción, así como la suspensión, la caducidad y la cancelación de la personería jurídico-política, serán declaradas por la Junta Central Electoral con todas las garantías del debido proceso legal en que el partido será parte.

Art. 66.- El partido extinguido por resolución firme de la Junta Central Electoral, no podrá ser reconocido nuevamente con el mismo nombre, los mismos estatutos, declaración de principios, programas o bases de acción política, por el término de cuatro (4) años.

Art. 67.- Los bienes del partido extinguido tendrán el destino establecido en los estatutos, y en el caso que éstos no lo determinaren, ingresarán, previa liquidación al "Fondo Partida - rio Permanente", sin perjuicio del derecho de los acreedores.

Los libros, Archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido quedarán en custodia por la Junta Central Electoral, - por medio de un Inspector-Secuestrador por ella designado, la que, pasados cuatro (4) años y previa publicación en un periódico de circulación nacional, por tres (3) días, podrá ordenar su destrucción o entrega a una institución benéfica.

CAPITULO II

De la extinción por acto voluntario

Art. 68.- La extinción por acto voluntario deberá ser adoptado en asamblea general del mismo partido, ordinaria o extraordinaria.

Todo acto voluntario por virtud del cual quede extinguido el partido político debe ser comunicado sin demora a la Junta Central Electoral por el directorio nacional o por representantes o apoderados designados al efecto por la asamblea que lo hubiere acordado, remitiendo un ejemplar o copia, certificada por el secretario general del partido o por un apoderado especial, del acta correspondiente.

La Junta Central Electoral, previa verificación de la regularidad de la documentación presentada, dictará una resolución por medio de la cual declarará extinguido el partido y ordenará que su registro sea cancelado y que su expediente sea clausurado y archivado, después de incorporar en él la referida documentación.

CAPITULO III

Caducidad de la personería jurídico-política por no alcanzar los partidos reconocidos representacion legislativa.

Art. 69.- Después de cada elección general, si de conformidad con los resultados del cómputo nacional que deberá verificar la Junta Central Electoral de acuerdo con la Ley Electoral

- e) Cuando el partido maliciosamente con fines de engaño se aparta de tendencias, propósitos y fines que animaron a sus fundadores;
- f) Cuando, sin autorización de la Junta Central Electoral, el partido cambia de nombre, o emplea palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias, o en pro de prácticas, sistemas o regímenes presentes o pasados, nacionales o extranjeros, o que por su cuenta y riesgo induzca maliciosamente a confusión cambiando su nombre para beneficiarse de la afiliación de otro partido;
- g) Cuando adopten el escudo o la bandera de la República, o imágenes o emblemas religiosos;
- h) Cuando realicen interna o públicamente actos reñidos con la Constitución y las leyes;
- i) Cuando atenten contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, derechos y garantías que la Constitución consagra;
- j) Cuando promuevan o propicien la alteración del orden público con fines manifiestamente subversivos;
- k) Cuando discriminen a sus afiliados por razones de raza o religión;
- l) Cuando usean la violencia, amenazas o engaños para obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de los otros partidos;
- m) Cuando impongan exacciones o deducciones de salarios a los empleados públicos o a las empresas privadas;
- n) Cuando usen en cualquier forma o a cualquier título los bienes del Estado, provincias o municipios, o los fondos públicos en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados;
- ñ) Por dar instrucciones militares a sus afiliados u organizarlos militarmente;
- o) Cuando procedan al empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración del poder personal.

TITULO VII

De la extinción de los partidos

CAPITULO I

Causas de extinción

Art 63.- Los partidos se extinguen:

- a) Por las causas que determinen los estatutos;
- b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con los estatutos;
- c) Cuando la actividad del partido, a través de sus autoridades o candidatos no autorizados por aquellas, fuere atentatoria a los principios fundamentales establecidos en los artículos 3, 21 y 22;
- d) Por impartir instrucción militar a sus afiliados u organizarlos militarmente.

ser apoderado cuando se haya agotado la tentativa de conciliación de que trata el Capítulo III, y la instancia será elevada por escrito por los grupos, oponentes o cabezas de tendencias, con pruebas documentales indispensables para que la Junta Central Electoral quede plenamente edificada. Queda prohibida la prueba testimonial an ambas cámaras y las pruebas documentales serán depositados en Secretaría. El laudo que emita el Tribunal de Arbitraje sobre la solución de la controversia, será inexorablemente acatado y cumplido por los grupos disidentes perdidosos. y si los disidentes se mantienen en rebeldía y manifiesta contumacia, la Junta Central Electoral solicitará al partido la desafiliación de los mismos, y todos perderán sus derechos frente al partido y frente a la Junta Central Electoral. La creación de la tentativa de conciliación, así como la creación del Tribunal de Arbitraje, son instituciones establecidas por la Junta Central Electoral para la efectiva supervivencia unitaria de los partidos reconocidos, el mantenimiento de la democracia y la consolidación de nuestra régimen civil, republicano, democrático y representativo.

TITULO VIII

Mantenimiento de la personería jurídico-política de los partidos reconocidos.

Art. 75.- La entrada en vigencia de la presente ley, en nada afecta la seguridad jurídica de los partidos políticos reconocidos ya existentes y registrados en la Junta Central Electoral, - los cuales mantendrán la personería de que fueron investidos con motivo de su reconocimiento.

Art. 76.- Quedan derogados los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Electoral No. 5884 del 5 de mayo de 1962, con sus correspondientes modificaciones, - por ser disposiciones atinentes a los partidos políticos y pasar a formar parte de la presente ley, así como cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los